

fiarse del sistema, del imperio de la ley y de sus dirigentes. Todo ello define una situación peculiar, diferente de la de las democracias consolidadas donde o no aparecen o se han superado esas constricciones y que en México es aún más grave por encontrarse en un estadio previo. Esta situación es obviamente dinámica en cuanto a que las restricciones conceptuales señaladas están sometidas a mecanismos de negociación continuos en el proceso de toma de decisiones por mor de la operatividad de la práctica poliárquica en la mayoría de las situaciones. Es por esta razón que el caso de aquellos países latinoamericanos que se incluyen dentro de estas democracias electorales puede ser definido como de países en vías de consolidación democrática³⁵, ámbito del que se alejan los que, como México (pero también algunos países de la Europa Oriental), no han producido todavía una correcta operatividad electoral.

³⁵ Manuel Alcántara, «Sobre el concepto de países en vías de consolidación democrática en América Latina», *Revista de Estudios Políticos*, núm. 74, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, octubre-diciembre de 1991.

MÉXICO FRENTE AL SIGLO XXI. LOS NUDOS GORDIANOS A DESHACER

LORENZO MEYER *

Los nudos gordianos que México debe intentar deshacer o destruir a fines del siglo XX, a fin de no atar su nuevo esfuerzo de modernización a los lastres del pasado o entrar en callejones sin salida, son, por lo menos, tres: el de su profunda división social, el de su autoritarismo político —ambos herencia del pasado— y uno que está surgiendo o resurgiendo de cara al futuro: el de la naturaleza de la soberanía en un entorno internacional cada vez más dominado por la gran potencia del Norte, los EE UU.

Para tratar de avizorar la naturaleza del siglo XXI mexicano, disponemos no de una sino de varias lentes. Y la elección de la lente depende tanto de las capacidades como de los valores e intereses del observador. En este ensayo se ha optado por el cristal del historiador, es decir, el que sirve para intentar interpretar el presente y vislumbrar el futuro en función del pasado. Por otra parte, dentro del gran campo que es la historia, se ha elegido para este ejercicio el área de la política, es decir, del proceso a través del cual la autoridad gubernamental distribuye los bienes escasos disponibles en una sociedad.

El enfoque histórico-político, como cualquiera de los alternativos, tiene limitaciones y sólo puede ofrecer, en el mejor de los casos, una visión parcial de lo que se busca conocer. Saber lo acontecido —los intereses, las instituciones que fueron, así como las estructuras, las individualidades y los eventos que determinaron su interacción— de ninguna manera asegura la posibilidad de prever con puntualidad lo que va a ocurrir. Es ya un lugar común señalar que la naturaleza misma de las disciplinas sociales no permite llegar a la predicción certera. Menos aún cuando se trata de la evolución política de toda una sociedad nacional, fenómeno extraordinariamente complejo, con multitud de variables y cada una de ellas difícil de definir. Sin

* Investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Sus estudios se centran sobre la historia política mexicana del siglo XX.

embargo, el esfuerzo no es estéril, pues nos permite, por lo menos, descartar cierto tipo de futuros —por no ser lógicamente posibles— y discriminar el grado de posibilidad de los otros. Una visión del pasado nos señala lo que difícilmente puede llegar a ser, y sólo de manera muy tentativa nos permite vislumbrar algo de lo que sí puede ser.

I. EL PUNTO DE PARTIDA. LAS MODERNIZACIONES PASADAS

El grupo que hoy se encuentra en México al frente de las estructuras e instituciones que determinan quiénes pueden lograr qué, cómo y cuándo, en relación a la distribución social de los bienes escasos —para usar una de las definiciones clásicas de la política, acuñada por Harold Lasswell—, están empeñados en un dramático proceso de destrucción y de construcción simultánea de instituciones y formas de vida, cuyo objetivo final, aseguran, es garantizar por la vía de la modernización, la viabilidad de México como país en el siglo XXI.

Ahora bien, antes de proceder a examinar y explicar este esfuerzo por modernizar a la sociedad mexicana por la vía de una transformación rápida y a fondo de algunas de sus estructuras —esfuerzo impuesto y controlado desde la cúspide del poder— conviene reconocer que la idea en sí misma no tiene nada de nuevo o de moderno. Esa búsqueda ha sido el santo grial de prácticamente todos los gobernantes mexicanos cuando las condiciones imperantes los han obligado a buscar en el cambio el afianzamiento del poder. En efecto, cuando la rutina se ha roto y los tiempos han hecho imposible que el objetivo de la acción política pueda ser simplemente el administrar lo heredado, entonces, en una especie de huida hacia adelante, las elites políticas han buscado la salida por la vía de la transformación.

Esta búsqueda de la modernidad, mediante el cambio impulsado desde dentro y desde la cúspide, se inicia desde antes de que la sociedad mexicana siquiera tuviera la forma de una nación independiente, cuando aún formaba parte del imperio español. Las reformas borbónicas ordenadas desde Madrid en el siglo XVIII intentaron, por la vía de la modernidad, hacer frente a una administración imperial que se encaminaba a, o ya estaba en, la bancarrota. Los Borbones se propusieron efectuar una redistribución del poder en su imperio de Ultramar, y no obstante los conflictos que tendría que generar, como la única forma para resolver de raíz la crítica situación del erario y

reafirmar el poder de la Corona y del Estado sobre ciertos poderosos intereses privados, basados más en el monopolio que en la acción productiva. En el caso mexicano, esta primera modernidad —inspirada en un modelo foráneo— fue muy problemática pero finalmente tuvo cierto éxito, según lo muestran los indicadores económicos. Se destruyeron privilegios tan añejos como fuertes —como los del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, por citar sólo el caso más conspicuo—, se racionalizaron áreas completas de la producción y se alentaron nuevas actividades. La recaudación aumentó, y por sí sola, al concluir el siglo XVIII, la Nueva España contribuía con las dos terceras partes de todos los ingresos que la Corona recibía de su imperio. El auge de la plata que tuvo lugar entonces, dejó testimonios materiales que perduran hasta nuestros días. Al iniciarse el siglo XIX, el producto interno novohispano, según sostiene Jaime Rodríguez, mostraba un notable y relativamente sano equilibrio entre agricultura, minería, industria artesanal y comercio¹. Esta primera modernización, sin embargo, no llegó a su conclusión lógica: se frenó bruscamente al despuntar el siglo XIX y toparse con la invasión napoleónica de España y el conflicto de independencia que esa invasión generó en los dominios americanos de Madrid. En la Nueva España la lucha pronto se transformó en un terrible conflicto social y racial, que finalmente llevó a que México ganara su independencia, pero que resultó extraordinariamente destructivo en términos económicos y administrativos.

El segundo gran esfuerzo de la modernización mexicana vendría medio siglo más tarde, acicateado por la gran desilusión que sustituyó al optimismo criollo y la desesperación de las elites frente al futuro. Como se recordará, en vísperas de la independencia, la inteligencia criolla —de la que Francisco Javier Clavijero es posiblemente su mejor exponente²—, se mostraba extraordinariamente segura de sí misma y de una patria que de manera tan positiva había sido descrita por Alexander von Humbolt en su *Ensayo político sobre el reino de la*

¹ El estudio más completo donde Rodríguez ilustra el éxito relativo de la reforma borbónica es el de él y Colin M. Maclachlan, *The Forging of the Cosmic Race. A Reinterpretation of Colonial Mexico*, California, University of California Press, 1980.

² Francisco Javier Clavijero (1731-1787) fue un criollo que nació en Veracruz, se educó en Puebla y fue expulsado como todos los miembros de la Compañía de Jesús. En Italia, y para responder a las críticas europeas a las formas de vida americanas, escribió su *Storia antica del Messico* (1780), con la que buscó destacar la originalidad de las civilizaciones americanas y el potencial del Nuevo Mundo.

Nueva España que vio la luz justo en vísperas de la independencia. Este optimismo resultó tan fuerte que fue capaz, incluso, de resistir los diez años de conflicto interno, para resurgir al proclamarse la independencia. En opinión de los criollos recién emancipados y que en 1821 se creyeron, por fin, dueños de su propio destino, el nuevo y gran reino de México —que iba desde la cintura centroamericana hasta la amplitud aún no bien conocida de Texas y la Alta California— era una promesa segura de riqueza, orgullo y felicidad para sus relativamente escasos habitantes: poco menos de siete millones.

Este optimismo independentista duró apenas un instante. Lo mató la incontrollable disputa interna entre elites y regiones, la separación de las provincias de Centroamérica y, sobre todo, la desastrosa guerra con los EE UU. Esta guerra culminó en 1847 no sólo con la pérdida de la mitad norte del enorme territorio heredado de la época colonial, sino que también incluyó, como epílogo, la terrible humillación de tener la capital misma bajo la ocupación extranjera. Y quizá lo peor fue comprobar que una parte sustantiva de la población se había mantenido indiferente ante los esfuerzos de los que habían buscado inútilmente defender la integridad territorial de una nación que resultó ser más un proyecto que una realidad.

La reacción que frente al desastre tuvo el ala más radical de la elite política mexicana de mediados del siglo XIX —los llamados liberales puros— fue lanzar la segunda modernización mexicana por la vía del ataque sin cuartel a la propiedad de las grandes corporaciones coloniales: la Iglesia católica y las comunidades indígenas, que entre otras cosas, eran el marco de las formas de vida de la mayoría de los mexicanos. El resultado fue una nueva y sangrienta guerra civil que se justificó, desde la perspectiva liberal y modernizadora, con una idea tan simple como poderosa: la necesidad de acabar a como diera lugar y costara lo que costase, con obstáculos centenarios que bloqueaban el camino que debía llevar a México a ingresar al capitalismo pleno, a la sociedad individualista y, por tanto, a la modernidad, estado indispensable para lograr la felicidad de la nación en un siglo donde la revolución industrial era ya un hecho en las economías centrales. La modernidad decimonónica fue definida por y para los liberales mexicanos, por los desarrollos que tenían lugar en el país que les acababa de vencer y que justamente por esa manifestación de poderío nacional constituía un modelo muy atractivo: los EE UU. El ideal a lograr fueron entonces, como bien lo ha mostrado Charles Hale, las instituciones, las políticas sociales y económicas e incluso los valores

culturales, de la única nación americana verdaderamente exitosa: los EE UU³.

Esta segunda modernización, cuando se logró imponer sobre sus enemigos y consolidarse tras la dura guerra civil e internacional que sostuvieron liberales y conservadores, tuvo también un éxito parcial pero innegable. Al iniciarse el siglo que hoy está por concluir, por primera vez en su historia las principales regiones de México quedaron comunicadas entre sí por el ferrocarril, surgió entonces el principio de un mercado nacional, y el humo de las fundiciones y fábricas apareció en el paisaje de algunas regiones como un heraldo de la prosperidad futura. Los puertos de ambos mares se ampliaron para permitir el flujo de un creciente comercio con el resto del mundo, la agricultura comercial y de gran escala apareció tanto en las plantaciones de henequén de Yucatán, como en los ingenios de azúcar de Morelos, los algodones de La Laguna o los trigales del valle del Yaqui. Surgió también un sistema bancario y, por fin, México recuperó el crédito internacional que había perdido a principios del siglo cuando no pudo pagar el servicio de su deuda inglesa.

Esta segunda modernización, como la primera, fue frenada en seco por un gran estallido social, tanto o más violento que los del pasado: la Revolución mexicana. La Revolución fue en gran medida el resultado del enorme costo social que había implicado imponer la modernización liberal desde arriba y sobre una mayoría indígena y mestiza, la que se trató como mero objeto por un régimen dictatorial. Además, los beneficios de dicho proceso habían sido distribuidos de manera muy desigual, en beneficio de una oligarquía que fue notable por lo estrecha y cerrada.

Asentado el polvo y el fuego de la Revolución mexicana —más costosa que la guerra civil del siglo anterior—, los nuevos gobernantes no mostraron prisa por lanzar la tercera modernización. En efecto, sin ser indiferente a la idea de reiniciar el crecimiento económico, la elite revolucionaria, guiada por una idea y una práctica populistas, centró sus esfuerzos en la destrucción de estructuras —como la gran hacienda— y en la creación de instituciones nacionales que le permitieran lograr la incorporación de las clases mayoritarias, subordinándolas, a ese nuevo entramado político-institucional centrado en una presidencia muy fuerte pero a la que se le impuso el principio de la no

³ Charles A. Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1972.

reelección. Masas organizadas e instituciones políticas sólidas y subordinadas a la presidencia serían la estructura que diera solidez al nuevo régimen.

La postrevolución —que coincidió con la segunda guerra mundial— marcó el inicio de la tercera ola modernizadora gubernamental en la historia mexicana; modernización que se inició sin que se hubiera completado la tarea de integración social propuesta por la Revolución. En los años cuarenta, una presidencia crecientemente fuerte y centralizadora, dirigiría hacia la industrialización, dentro de un mercado protegido, los esfuerzos de un Estado abiertamente intervencionista y con vocación de participación en todas las áreas de la economía y la actividad social. La dirigencia postrevolucionaria centró sus esfuerzos en crear una industria, en parte pública y en parte privada, que aprovechara un mercado interno muy protegido, para crecer con rapidez sustituyendo importaciones. Otra vez el resultado inicial fue espectacular. Por tres decenios, el PIB creció a un ritmo promedio del 6%, el país dejó de ser predominantemente rural y para el decenio de los sesenta se pudo hablar seriamente de un «milagro mexicano» que prometía llevar al país a un desarrollo autosostenido, sacarlo del subdesarrollo e instalarlo, por fin, en la largamente buscada modernidad. Por tercera vez, este esfuerzo de las élites políticas topó con una pared: pasada la etapa fácil de sustitución de importaciones, la estructura industrial protegida —la supuesta punta de lanza de la modernidad— resultó ser ineficiente, no competitiva en el mercado internacional y, por tanto, incapaz de generar directa o indirectamente las divisas necesarias para sostener su ritmo de crecimiento. Del breve «auge petrolero» con que a fines de los setenta se intentó resolver el problema de un intercambio con el exterior sistemáticamente deficitario, se pasó, abruptamente, a la crisis de pagos y a tomar rápidamente conciencia de la inviabilidad del modelo económico en su conjunto ⁴. Esta vez México tuvo compañía: prácticamente toda América Latina se encontró en una situación similar.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, en esta tercera crisis de la modernidad no hubo estallido social sino una mera rebelión en las urnas en 1988 contra el partido de Estado que desde 1929 mantenía el monopolio del poder. Sin embargo, la clase política responsable del fracaso pudo contener de manera casi incruenta la insurgencia electo-

⁴ Roberto Newel y Luis Rubio, *Mexico's Dilemma. The Political Origins of Economic Crisis*, Boulder, Westview Press, 1984.

ral, aunque no sin antes haber tenido que gastar una buena parte de su legitimidad en sofocarla mediante la imposición de triunfos electorales sin credibilidad ⁵.

II. EL PROYECTO ACTUAL

Es aquí donde, por fin, se topa el pasado con el presente y, sobre todo, con el futuro. La crisis irreversible, final, del modelo de desarrollo postrevolucionario, ha forzado a la clase dirigente mexicana a efectuar drásticos cambios internos, a fin de lograr mantener un poder que por momentos pareció escapar de sus manos. La parte medular del cambio actual consistió en lanzar sin pérdida de tiempo —a partir de 1985— la cuarta modernización mexicana, cuya etapa inicial quizá está por concluir y cuyas características están ya determinando lo que será México en el siglo XXI.

La modernidad a la que aspiran los actuales dirigentes mexicanos no es, como tampoco lo fue en el pasado, muy original; está inspirada en los desarrollos exitosos de ciertas economías centrales. De hecho, el modelo es extraordinariamente similar al adoptado ya por muchas otras de las élites del mundo periférico y al que, a falta de mejor calificativo, se le denomina neoliberal. Si hay algo de diferente en el caso mexicano, eso se encuentra no en los fines, sino en algunos de los medios. Se trata de lograr la modernización de manera acelerada, encausándola con los instrumentos que ofrece el aparato autoritario heredado de las etapas anteriores: el partido de Estado y un poder presidencial sin contrapesos.

Esta cuarta modernización mexicana está tan definida y marcada por los procesos que han tenido y tienen lugar en los países centrales, como las anteriores. En efecto, lo que define hoy día a la modernidad mexicana y a las otras muchas que se intentan en otras partes, es el triunfo económico y político aplastante, sorprendente, de Occidente, o más bien, de las grandes economías capitalistas, —incluida la de Japón—, sobre sus rivales históricos: el bloque socialista encabezado

⁵ El esfuerzo enorme del gobierno para imponer su voluntad sobre la insurrección electoral de una parte mayoritaria de la población, está bien analizado por Juan Molinar Horcasitas en: *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*, México, Cal y Arena, 1991, pp. 153-250.

por la Unión Soviética. Otra vez hoy, como cuando tuvo lugar el triunfo de los liberales mexicanos decimonónicos, unos EE UU victoriosos son el ejemplo a seguir. Y a seguir al punto de buscar la integración formal con ellos mediante el ofrecimiento, hoy en negociación, de un tratado de libre comercio. Esta integración económica también se intentó en medio de la gran crisis del siglo XIX, pero finalmente no se logró por falta de consenso a ambos lados del Río Bravo; los gobernantes mexicanos confían en que hoy la situación será distinta y que las fuerzas que en ambos países se oponen a un tratado de libre comercio, similar al que ya se firmó entre EE UU y Canadá, serán derrotadas por las que sí lo favorecen.

El nuevo modelo neoliberal, requiere, como en el pasado, que México se embarque en un proceso simultáneo de destrucción y construcción institucional profundo, y con un alto costo social. La destrucción más importante es la del gran aparato burocrático y económico gubernamental. Como ya se señaló, la modernización postrevolucionaria dotó a la presidencia mexicana de una compleja maquinaria económica, de naturaleza expansionista, y cuyo comportamiento afectaba directa o indirectamente el destino económico del grueso de los mexicanos, pues sus ramificaciones habían penetrado en todas las áreas y niveles que tenían que ver directa o indirectamente con la marcha de la actividad productiva. Del comportamiento y decisiones tomadas en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, la red bancaria estatal, los ferrocarriles, las aerolíneas, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), los grandes complejos industriales como los de Lázaro Cárdenas-Las Truchas o Ciudad Sahagún, etcétera, dependía el pulso de una economía donde la burguesía privada nacional era en buena medida criatura y dependiente, e incluso prisionera, de la acción estatal. A la acción económica directa del Estado se debía sumar la indirecta que era, y aún sigue siendo, tan decisiva como la otra. En efecto, el comportamiento de los sindicatos y de la masa asalariada urbana, el de los ejidatarios, propietarios y trabajadores del campo, la calidad y extensión de la educación a todos los niveles, de la investigación tecnológica, del grueso de los servicios de salud, etcétera, dependían, y aún dependen, de decisiones hechas dentro de la esfera del aparato gubernamental central. En resumen, la gran maquinaria de administración, producción y servicios del Estado, creada a la sombra de la postrevolución mexicana, le permitió a la burocracia oficial en general y a la presidencia en particular, tener una influencia

enorme, decisiva, sobre el conjunto del sistema productivo y de las relaciones entre los actores de ese sistema, influencia que sólo era superada por las de las burocracias de los países de partido único y economía centralmente planificada.

Transformar, reducir o destruir los intereses creados dentro y al amparo de lo que hoy es calificado como un gran, ineficiente, incontrolable, irresponsable y terriblemente corrupto aparato estatal mexicano, es una de las caras de la modernización y determinante del futuro inmediato del país. Hacer al Estado mexicano pequeño pero fuerte y no obeso pero débil por su ineficiencia, es el lema de la tecnocracia modernizadora en el poder.

La otra cara del proceso de la transformación neoliberal, la constituye la construcción de los sustitutos de ese aparato estatal, a fin de delegar en ellos una parte sustantiva de la distribución de los bienes y valores que produce la sociedad mexicana, y cuya distribución es la esencia de la política. El actual esfuerzo modernizador de la elite política mexicana tiene como meta inmediata la construcción de un mercado nuevo, abierto a la competencia internacional, capaz de despolitizar amplias áreas de la actividad cotidiana de los mexicanos, y al que verdaderamente se le deje la responsabilidad de asignar prioridades y otorgar castigos y recompensas y estructurar el nuevo aparato industrial eficiente que México espera construir para el siglo XXI. Dada la gran apertura económica hacia el exterior que México adoptó a partir de 1985, el eje de ese mercado, y por tanto de la modernización misma, estará en buena medida fuera de las fronteras nacionales, concretamente en los EE UU. Al dejar en un mercado internacionalizado, es decir, en la empresa privada nacional e internacional, la responsabilidad básica de la distribución de recursos, se está intentando, de nuevo, dar forma a esa burguesía poderosa que desde el siglo pasado le ha faltado a la modernización mexicana. En esta ocasión, sin embargo, al integrar formal o *de facto* el proceso económico de México al de los EE UU, es claro que el espacio que no sepa o pueda ocupar la burguesía mexicana, se lo tendrá que ceder a aquella con la que se está asociando en condiciones de obvia inferioridad en términos de recursos y experiencia: la norteamericana.

III. EL FUTURO

Un buen punto de partida para aventurar algunas hipótesis sobre el posible futuro de la cuarta modernización mexicana, lo constituyen algunas de las tesis propuestas por Guillermo Bonfil, científico social de notable sensibilidad y a quien nunca arredraron los grandes temas y generalizaciones. La propuesta central de Bonfil puede resumirse así: desde el inicio de la colonización europea en el siglo XVI hasta el día de hoy, los grupos sociales que en México han detentado el poder político, económico e ideológico se han afiliado, por herencia o circunstancia a la civilización occidental, y han sostenido siempre proyectos históricos que sistemáticamente han excluido o negado la civilización de origen mesoamericana o, más bien, lo que de ella ha quedado en cada época. Han negado a la vez que explotado al México indio y mestizo. Este México diferente pero mayoritario —al que Bonfil llamó el México profundo— siempre ha sido dominado, pero subsiste como entidad diferente, pese a todos los intentos hechos desde las alturas del poder —especialmente durante los procesos de modernización— para destruirlo o negarlo en sus valores y formas de vida, y constituye hoy la raíz más profunda de nuestra sociedad. Por tanto, de cara al futuro el reto principal de la colectividad mexicana es lograr lo que no se ha hecho en cinco siglos ni en las tres modernizaciones anteriores: su incorporación efectiva al proceso nacional pero respetando sus intereses e identidades⁶.

Ya sea que la gran dicotomía mexicana se explique por la vía elegida por Bonfil —la del conflicto sistemático en la geografía mexicana entre dos civilizaciones— o por cualquier otra que se considere más apropiada, el hecho histórico es incuestionable: México es una sociedad profundamente dividida desde hace siglos, y el paso del tiempo y las diferentes modernizaciones no han sabido borrar de manera positiva esa división y oposición. En realidad, todas las modernizaciones mexicanas han concluido en un fracaso más o menos espectacular, porque el suelo social sobre el que se han construido tiene una gran grieta que, al no cerrarse sino mantenerse o incluso ahondarse durante el proceso de cambio acelerado, ha hecho finalmente imposible que el edificio de lo nuevo se sostenga.

⁶ Guillermo Bonfil Batalla, *México profundo. Una civilización negada*, México, CONACULT-Grijalbo, 1990, pp. 101-102.

En principio, la Revolución mexicana se propuso no tanto modernizar al país sino, sobre todo, acabar de una vez por todas con esa dicotomía y contradicción central entre los dos Méxicos, y que arranca de la diferencia entre conquistador y conquistado —entre el México profundo y el de la superficie—, y que había impedido la formación de una verdadera nación. Sin embargo, con la gran tarea a medio hacer, el proyecto de modernización postrevolucionaria —el encabezado por el presidente Miguel Alemán— abandonó la integración nacional como su primer objetivo y deber, para en cambio poner el énfasis en un desarrollo industrial rápido, hecho a costa de la explotación del México rural y marginal urbano.

No es nada aventurado afirmar que la naturaleza del siglo XXI mexicano —al menos de sus inicios— depende básicamente de la forma en que se dé respuesta a la persistencia de la división de la sociedad mexicana en dos mundos distintos y antagónicos, pues uno de ellos —el de la minoría impulsora y beneficiaria de las modernizaciones— ha subordinado y explotado sistemáticamente al otro —al mayoritario—, pero justamente por imponerle a este último los términos de la modernización, sin negociarlos, se ha terminado por hacerlo refractario al cambio. Mientras la integración se intente sin permitir a los históricamente sometidos contar con los instrumentos políticos para negociar las condiciones de esa integración, las posibilidades de éxito de la empresa en términos tanto práctico como éticos serán menores de las que tendría en otras circunstancias.

Al dejar básicamente en manos de las fuerzas privadas del mercado la distribución de tareas y beneficios de la actividad colectiva, el neoliberalismo sigue una ruta que inevitablemente evita tocar a fondo las cuestiones de justicia social. En el modelo económico hoy dominante en México y en el mundo, el objetivo central es la eficiencia en la maximización de la ganancia y no la superación de las desigualdades. En realidad, y de acuerdo con la argumentación de un líder empresarial mexicano, esas desigualdades son funcionales al modelo, pues la concentración del ingreso es indispensable para que se genere el ahorro necesario para la gran inversión que requiere la reactivación de la economía mexicana bajo las nuevas bases neoliberales⁷.

En los EE UU —el modelo original sobre el que se monta el proyecto político neoliberal mexicano—, la retirada del Estado de cier-

⁷ Véase el artículo de Lorenzo Servidje aparecido en *Nexos*, núm. 153, septiembre de 1990.

tas áreas en beneficio de las fuerzas del mercado ha tenido altos costos sociales. El porcentaje de la población norteamericana que vivía por debajo de la línea considerada como la «de la pobreza» era de alrededor del 11% en 1978, pero hoy posiblemente ya haya alcanzado el 14% y va en aumento⁸. Un fenómeno similar tiene lugar en Gran Bretaña. Si en los modelos originales del neoliberalismo, con un nivel de vida muy superior al de México y con una desigualdad social tradicionalmente menor, hay una marginalización creciente, ¿qué es lo que puede ocurrir en una sociedad como la mexicana donde, según cifras oficiales, casi el 50% de la población vive en condiciones definidas como de pobreza y, de entre ellos, casi la mitad tiene que sobrevivir en condiciones calificadas como de pobreza extrema?⁹

Enrique Alduncin Abitia, en un trabajo recién publicado pero muy mal distribuido, señala que el 20% más pobre de la población mexicana —el México profundo en todos los sentidos— recibía en 1950 el 6,1% del ingreso disponible, pero en 1987, cuando el México neoliberal estaba naciendo, la proporción del ingreso que recibía esa desafortunada porción de mexicanos había descendido a sólo 2,4%. El reverso de la brutal moneda de la desigualdad mexicana es la proporción de ese ingreso que recibe el 20% de los mexicanos más afortunados —los principales beneficiarios de las modernizaciones—; en 1950 ese 20% disponía del 59,8%, pero en 1987 pudieron disponer nada más ni nada menos que del 65,5%. Si el índice de desigualdad social construido con base en estas cifras sobre los ingresos de los extremos más pobres y más ricos de la sociedad mexicana, era de 10 a mediados del siglo, resulta que 37 años más tarde había aumentado a más del doble: a 27,3¹⁰. En la actualidad, el llamado Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), destina alrededor de dos mil millones de dólares anuales —el equivalente a un cuarto o un quinto del gasto que significa el servicio de la deuda externa— a paliar la pobreza de esos 40 millones de mexicanos que han sido calificados como pobres, pero dada la magnitud del problema, es muy difícil

⁸ Cifras del United States Census Bureau, citadas por *Newsweek*, 2 de diciembre de 1991.

⁹ Las cifras sobre la pobreza fueron dadas a conocer en 1990 por el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.

¹⁰ Enrique Alduncin Abitia, *Los valores de los mexicanos*, t. II, México, Fomento Cultural Banamex, A. C., 1991, pp. 34-35. El índice de desigualdad es definido por el autor como el número de veces que es mayor el ingreso del 20% más rico de la población respecto al del 20% más pobre.

suponer que esos recursos logren cerrar, o al menos impedir, que siga aumentando la enorme brecha que separa a los dos Méxicos.

De cara al siglo XXI, el problema principal de México, el reto fundamental, no es tanto tener un crecimiento significativo y sostenido del PBI —eso, aunque difícil, ya se logró en el pasado y se está logrando de nuevo ahora— sino encontrar respuesta a un problema relacionado pero distinto, que ya dura más de cinco siglos, que es el de la auténtica integración nacional, o sea, el de la disminución de la desigualdad social.

El tema de la integración nacional nos lleva naturalmente a otro: el planteado por el hecho de que el México marginado de los frutos de las modernizaciones pasadas nunca ha dispuesto de los instrumentos políticos adecuados para enfrentarse a sus dominadores por una vía no violenta, por una que no desemboque en una catástrofe. La nueva modernización, la neoliberal, se está llevando a un ritmo que bien podemos calificar de vertiginoso porque su motor principal, la presidencia, está usando todos los instrumentos autoritarios a su disposición—partido de Estado, burocracia federal, sindicatos oficiales, impotencia de los cuerpos legislativos y judiciales, control sobre los gobiernos locales, sobre los medios masivos de comunicación, etcétera— para destruir oposiciones, reconstruir las alianzas internas y externas y dar forma a nuevas instituciones e intereses. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que una vez impuesto desde arriba el nuevo esquema económico, la estructura autoritaria que lo montó vaya a dar paso a un nuevo régimen político donde se haga realidad la vieja demanda de establecer, por fin, la democracia política e institucionalizar la legitimidad pluralista.

Existe el peligro de que los nuevos intereses burocráticos y privados del orden neoliberal, creados autoritariamente, busquen prolongar, en lo sustantivo, el arreglo autoritario, aunque aceptando los cambios superficiales que las circunstancias demanden. En efecto, hoy por hoy, los impulsores y los ganadores de la cuarta modernización no tienen muchos incentivos para aceptar y, menos aún, buscar la democratización política como parte del nuevo orden. Es más, se puede suponer que está ocurriendo justamente lo contrario: tienen muchas razones para que la elite política y sus aliados en el sector privado busquen posponer esa democratización para seguir controlando por la vía tradicional a aquellos actores sociales sobre cuyos hombros ha caído antes y vuelve a caer ahora el peso mayor del cambio. Así pues, frente al siglo XXI, el añejo autoritarismo mexicano

—el que ha permitido la dominación secular del México profundo— sigue constituyendo un problema cuya solución no está asegurada de antemano, pues desafortunadamente el tránsito a la economía abierta no requiere de manera forzosa una política igualmente abierta. La nueva concentración de la riqueza que se está dando ya en México puede ser compatible con, y apoyar, la ya existente concentración del poder y las limitaciones que impone a la pluralidad política propia de las democracias reales.

Sin la instauración de una auténtica libertad política en México, no es posible la verdadera división de poderes ni la creación de los canales para que el México «inmodernizable» logre tener a su disposición los instrumentos adecuados para la defensa de sus intereses y llevar a cabo su integración a la modernidad de manera distinta a la del pasado. Es más, sin la superación del autoritarismo, el México del siglo XXI no podrá resolver, o al menos reducir a proporciones aceptables, muchos de los problemas que hoy le aquejan además del de la desigualdad, como son, por ejemplo, la omnipresente corrupción pública, la violación constante de los derechos humanos, la degradación acelerada del medio ambiente, etcétera. Y sin la solución de tal conjunto de problemas, el marco jurídico seguirá, como hasta ahora, viviendo en el plano de la irrealidad. El Estado de derecho seguirá siendo una mera posibilidad y no la condición en que realmente se desarrolle la vida social mexicana.

El tercer nudo gordiano a deshacer, para lograr que México mantenga su carácter de auténtica nación independiente, es el de su relación con los EE UU. Por una buena parte del siglo pasado y del actual, las diferentes elites políticas mexicanas se plantearon como asunto crucial la preservación y ensanchamiento de un espacio político que les permitiera una cierta libertad de acción frente a los EE UU y a su vocación imperial. El planteamiento más claro en este campo —y más exitoso en su solución— lo hicieron los dirigentes revolucionarios, en particular Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.

Desde fines del siglo XIX, el nacionalismo mexicano se ha definido básicamente frente a los EE UU. En nombre de dicho nacionalismo, los líderes del país justificaron sacrificios sociales como los que acompañaron a la expropiación petrolera de 1938 o, más importante aún, a la industrialización sustitutiva de las importaciones. No es posible negar que, en la práctica, ese nacionalismo ha servido no sólo al interés nacional, tal y como éste ha sido definido en cada época, sino también para esconder legitimar algunos de los peores abusos de

las clases gobernantes. Sin embargo, y pese a todo, México logró mantener una notable independencia relativa frente a su gran vecino del Norte, pese al hecho indiscutible de que, a partir de 1914, EE UU se convirtió en la potencia hegemónica de América Latina. La diversificación, por productos y por países, de las exportaciones mexicanas no fue, finalmente, muy exitoso, pero por muchos años fue un esfuerzo real que tuvo como objetivo dar sustancia a los postulados nacionalistas. Lo mismo se puede decir de la búsqueda de pluralidad en el financiamiento proveniente del exterior o de la legislación restrictiva de la inversión extranjera, cuya dedicatoria fue bien entendida por los intereses norteamericanos. En los foros políticos multilaterales, como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, el voto mexicano no siguió automáticamente el camino indicado por Washington.

En vísperas del fin del siglo, el nuevo proyecto económico mexicano supone que la prioridad nacional no es ya seguir la lucha por mantener la distancia económica frente a EE UU sino lo opuesto. Ya en 1947 lo había advertido Daniel Cosío Villegas, si el esfuerzo nacionalista de la Revolución mexicana no superaba la crisis política y moral en la que había caído, entonces e inevitablemente llegaría el momento en que los dirigentes mexicanos confiarían el futuro del país a los EE UU, con lo que, probablemente, resolverían algunos de los problemas materiales de México, pero a costa de que el país dejara de ser una sociedad con identidad propia¹¹.

Con o sin el tratado de libre comercio que México está negociando con EE UU y Canadá, y cuya aprobación no está asegurada de antemano, la lógica de las nuevas circunstancias lleva inevitablemente a que México —y la América Latina en su conjunto— camine hacia la integración económica con los EE UU. El reto político internacional para el México del siglo XXI es, por tanto, llevar a cabo su integración con la gran potencia, tratando de evitar lo que desde tiempo atrás se ha temido: que México sea meramente el traspatio del mercado de la América del Norte. Ahora bien, si bajo ninguna circunstancia la defensa de la identidad y el interés mexicanos va a ser una tarea muy fácil en el siglo XXI —cuando la integración hacia el Norte llegue a sus límites naturales— más difícil lo será si se llega a ese punto sin antes haber deshecho los dos grandes nudos antes descritos: el de la falta

¹¹ Daniel Cosío Villegas, «La crisis de México», *Cuadernos Americanos*, vol. XXXII, marzo-abril de 1947, pp. 29-51.

de una integración interna y de la ausencia de un sistema político democrático.

IV. CONCLUSIÓN

Los esfuerzos de la minoría por arrastrar a México por el sendero de lo que en cada época histórica se ha considerado el modelo de la modernización —siempre un modelo externo— es un esfuerzo inconcluso que lleva ya más de doscientos años. El intento que hoy estamos viviendo es el último eslabón de una cadena secular.

Todos los esfuerzos anteriores de modernización exigieron un costo social considerable —que siempre se pagó de manera muy inequitativa— aunque todos y cada uno de ellos tienen en su haber logros importantes. Sin embargo, al final ninguno logró lo que se buscaba: establecer de manera permanente la modernidad en México o a México en la modernidad. Si este nuevo esfuerzo modernizador de fines del siglo XX va a ser distinto en su resultado, tiene que resolver el problema social más antiguo y profundo del país: el de la integración social de la nación. Toda la historia mexicana ha transcurrido dentro de marcos políticos autoritarios; y la persistencia de la gran división social, de la marginalidad de grandes grupos de mexicanos, no es ajena a este autoritarismo. Condición necesaria, aunque no suficiente, para proceder a la auténtica integración nacional, es la sustitución del viejo autoritarismo por un sistema político abierto, democrático y realmente moderno. Esa sustitución no está, ni mucho menos, asegurada.

Finalmente, la enorme desigualdad existente entre México y el país vecino del Norte, los EE UU, con el cual se va a integrar por la vía de la apertura del mercado y la disminución del papel económico central que en el pasado tuvo el sector público, se convierte no sólo en una oportunidad singular de ingresar en uno de los bloques económicos en los que se está dividiendo el mundo, sino también en un peligro considerable para la identidad mexicana.

En conclusión, visto desde una perspectiva histórica, el futuro de México en el inicio del próximo siglo estará determinado por la respuesta que se pueda y se quiera dar a las demandas o retos de la integración interna, la democratización política y la relación con los EE UU.